**Contribuciones de México para el Informe Temático del**

**RE sobre Libertad de religión o de creencias**

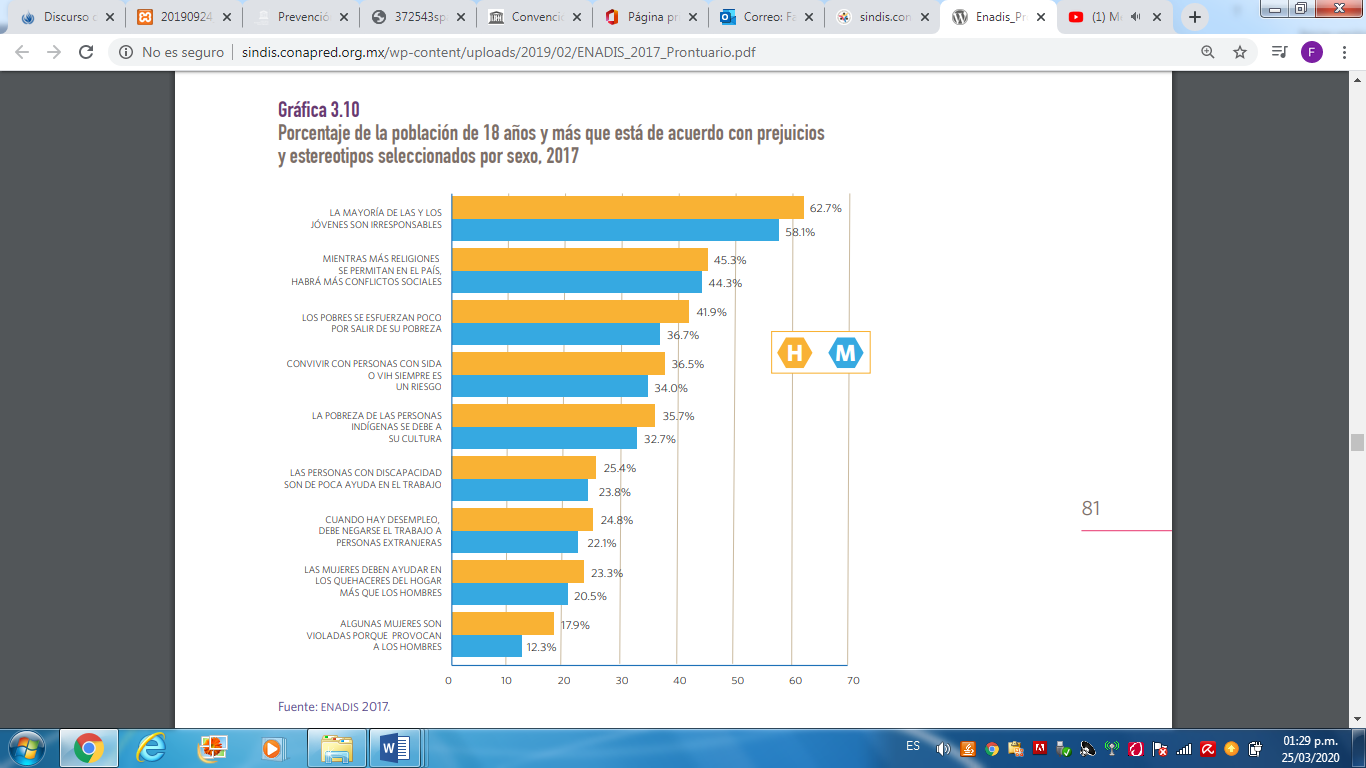
* **Discriminación en la ley y en la práctica.**
* **Patrones y ejemplos de discriminación contra comunidades religiosas o de creencias minoritarias en el área de:**

1. **Derechos civiles y políticos**
2. **Derechos económicos, sociales y culturales**

En congruencia con el objetivo 16 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, específicamente con la meta 16.10 garantizar el acceso público a la información[[1]](#footnote-1), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en trabajo coordinado con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elaboraron la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 cuyo objetivo es generar información estadística que permita medir la magnitud, causas y expresiones de la discriminación en México; profundizando en el conocimiento sobre quiénes sufren discriminación, en qué ámbitos sociales sucede y los factores sociodemográficos y culturales que se relacionan, para la definición de indicadores de diseño de legislación y política pública.

Las poblaciones que estudia la ENADIS son: mujeres, niñas y niños, adolescentes y jóvenes, personas mayores, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar remuneradas, personas de la diversidad religiosa[[2]](#footnote-2) y aquellas nacidas en otro país.

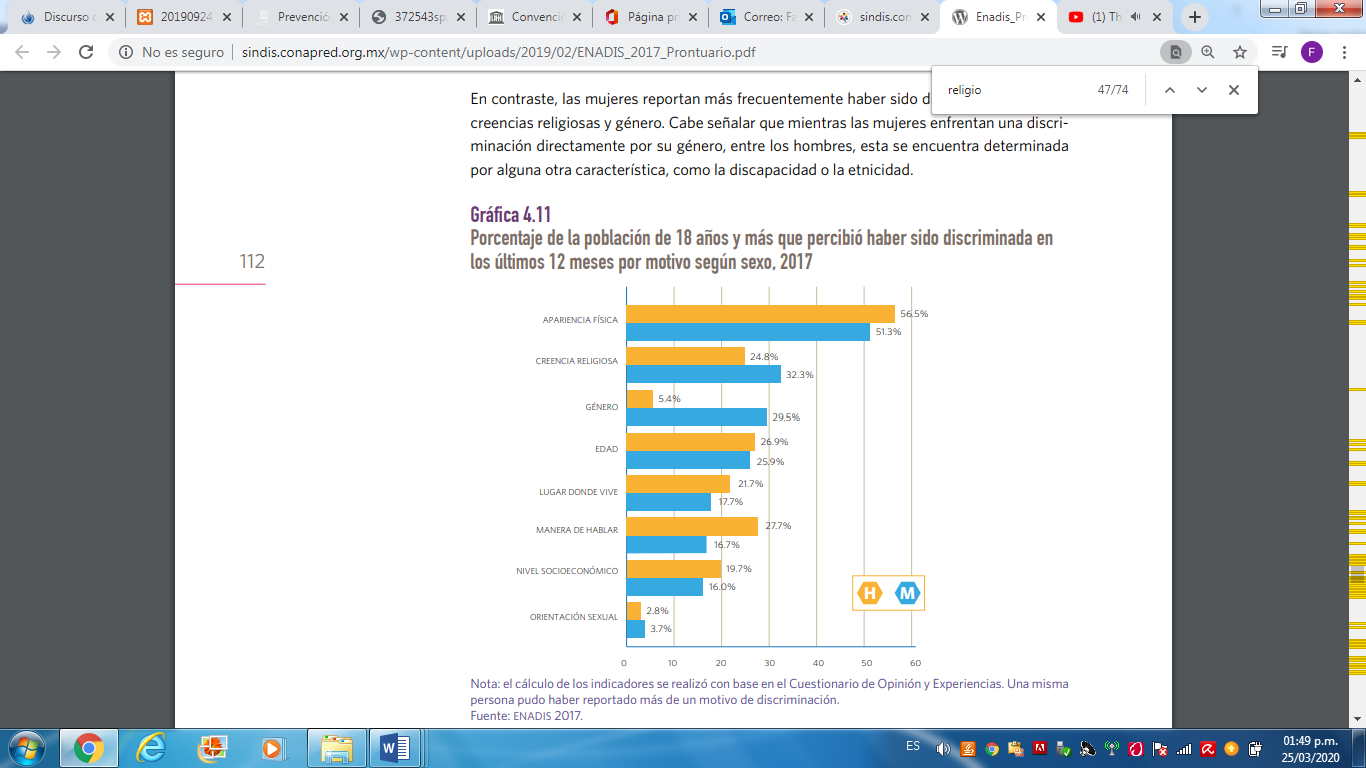
De acuerdo con la ENADIS, la presencia y persistencia de la discriminación se asocia a elementos de orden simbólico cultural e histórico que se materializa en prejuicios y estereotipos en la sociedad. En este sentido, según datos de la ENADIS en México casi la mitad de las personas de 18 años y más piensa que mientras más religiones se permitan en el país, habrá más conflictos sociales (44.7%)[[3]](#footnote-3). Ver la siguiente gráfica



En esta tesitura, la población de la diversidad religiosa considera que su principal problema es la falta de respeto a sus costumbres y tradiciones (32.6%), seguido por la percepción de que el gobierno apoya más a la comunidad religiosa (20.9%) y la falta de oportunidades para mostrar sus creencias a la sociedad (15.4%) sin que se registren diferencias significativas por sexo, lo cual es indicador de opiniones más homogéneas entre hombres y mujeres en torno a sus problemáticas. Ver la siguiente gráfica



Después de la apariencia física, las creencias religiosas (28.7%) han sido declaradas como el motivo de discriminación con mayor incidencia, de hecho, las mujeres reportan más frecuentemente haber sido discriminadas por su creencias religiosas y su género, lo que revela que la discriminación por religión no es un elemento neutro al género. Ver la siguiente gráfica

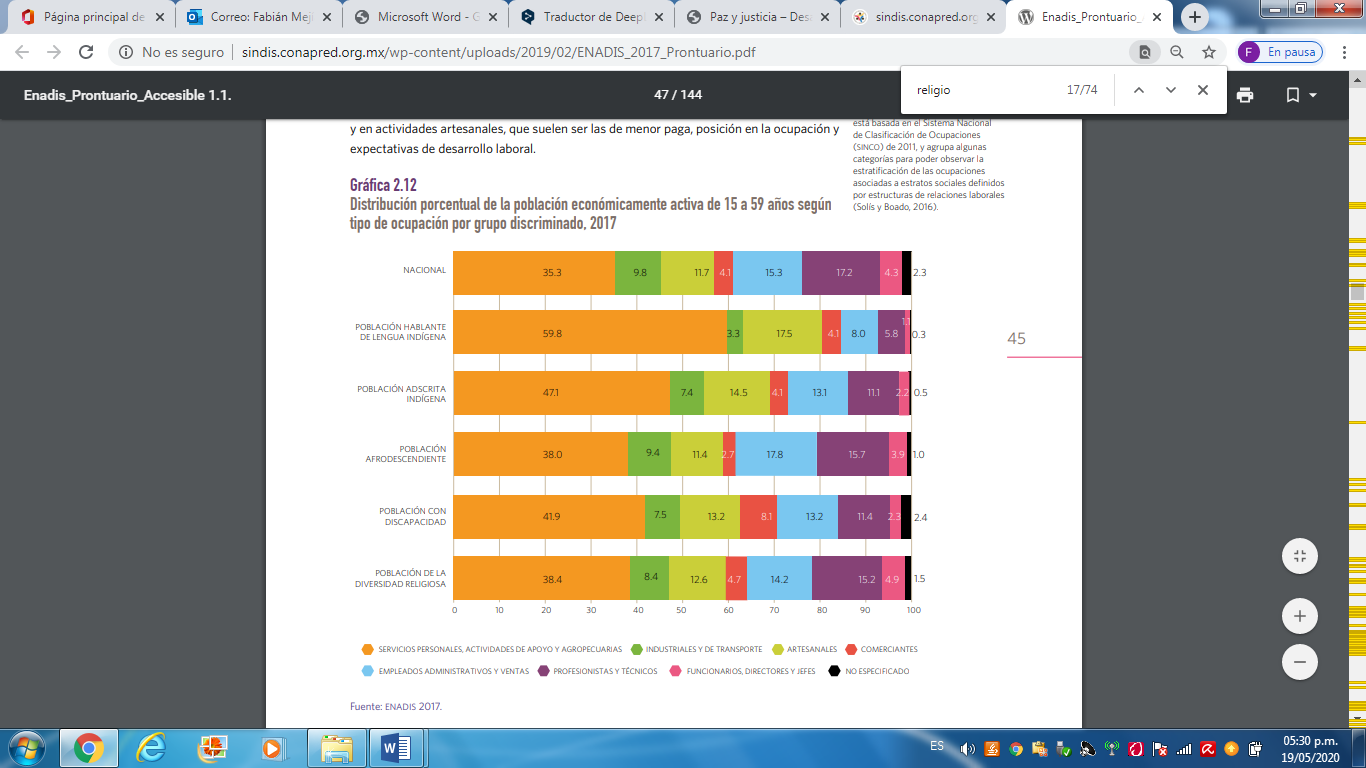


Asimismo, la ENADIS 2017 reconoce que la discriminación genera obstáculos para el ejercicio y disfrute de otros derechos. En tal virtud, dentro de la Encuesta es posible ubicar que entre los grupos discriminados –incluida la diversidad religiosa- el porcentaje sin escolaridad es mayor al observado para el promedio y la proporción de quienes cuentan con educación media superior y superior. Las personas de la diversidad religiosa apenas presentan leves variables respecto al promedio nacional en cuanto a la matriculación escolar. Ver la siguiente gráfica.



En cuanto a las brechas para el acceso al trabajo, la ENADIS 2017 realiza un análisis sobre el tipo de ocupación que la población lleva a cabo en términos de calificación que se requiere para su desempeño, generalmente asociada con la remuneración y las prestaciones. En México, 35% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada entre 15 y 59 años se concentra en empleos de servicios personales, actividades auxiliares y trabajos agropecuarios, actividades agrupadas bajo la categoría de trabajos manuales no calificados, mientras que alrededor de 41% se distribuye en trabajos artesanales, industriales, el comercio y otros de calificación intermedia.

Los grupos discriminados –entre ellos las personas de la diversidad religiosa- tienen proporciones mayores de personas que trabajan en las ocupaciones de menor calificación, como los servicios personales, de apoyo, agropecuarios y en actividades artesanales, que suelen ser las de menor paga, posición en la ocupación y expectativas de desarrollo laboral. Ver la siguiente gráfica.



Las brechas en la participación económica muestran las barreras de ingreso al mercado de trabajo remunerado. Sin embargo, es importante identificar también la calidad de los empleos en términos de su formalidad contractual (es decir, si existe un contrato y de qué tipo es) y las prestaciones anexas, en especial las relacionadas con los servicios de salud.

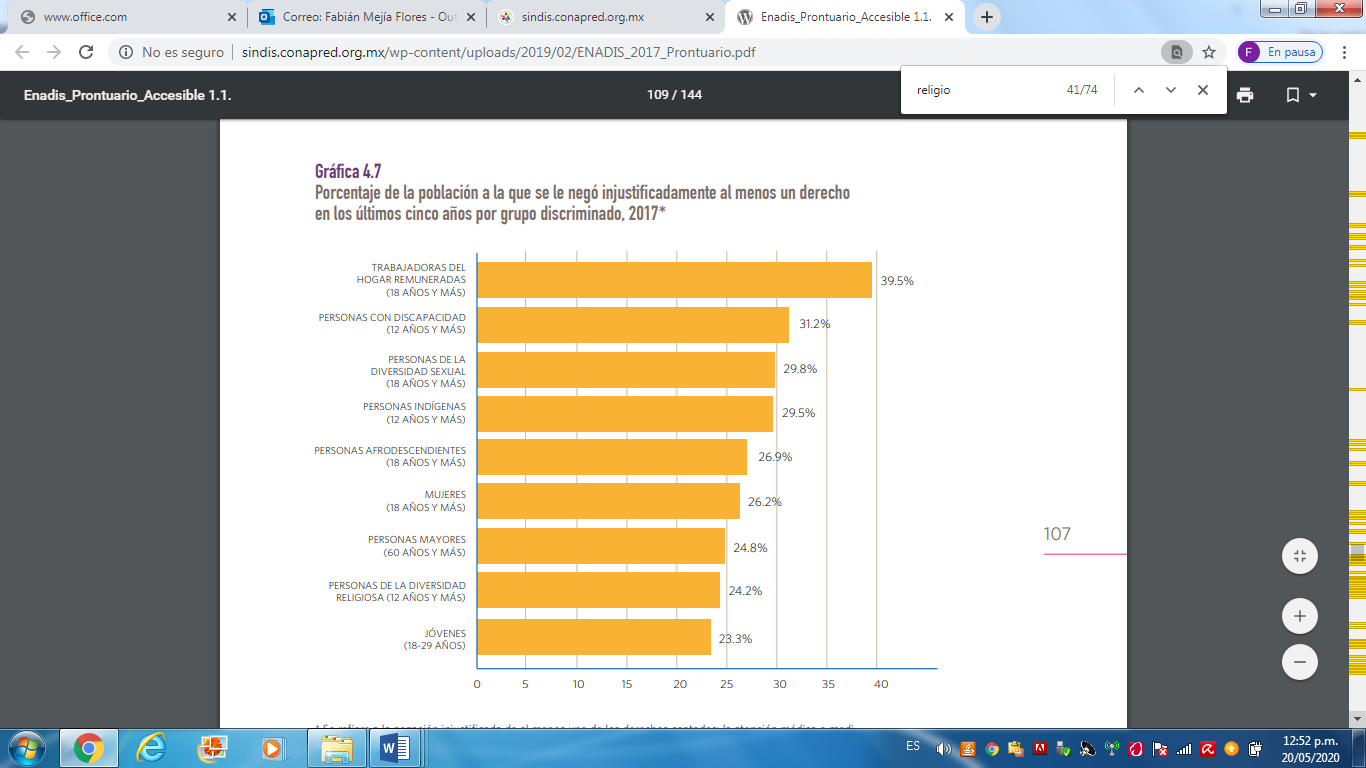
Las prestaciones laborales en materia de salud presentan una tendencia similar y, de nuevo, las personas que pertenecen a grupos discriminados registran los porcentajes más bajos de acceso. Ver la siguiente gráfica



Como se puede apreciar en la gráfica anterior, las personas de la diversidad religiosa presentan pequeñas variables respecto al acceso a un trabajo mediante un contrato laboral y prestaciones médicas. En comparación con los niveles observados en el contexto nacional, las personas pertenecientes a grupos discriminados se atienden en mayor medida en el Seguro Popular, cuya cobertura de servicios es menor que la ofrecida en la seguridad social contributiva directa (IMSS, ISSSTE, Pemex y otros) y los seguros médicos privados: 72% de población hablante indígenas, 41.4% de la población de la diversidad religiosa y 38.4% de la población con discapacidad, lo cual expresa un acceso desigual a los bienes y servicios de salud entre la población.

Por otro lado la ENADIS 2017 capta la negación injustificada de al menos un derecho básico en ámbitos como la educación, la salud, el trabajo y la seguridad social, la atención médica o medicamentos; la atención o servicios de alguna oficina de gobierno; la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco, recibir apoyos de programas sociales; la oportunidad de trabajar u obtener un ascenso laboral y obtener algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta.

Al analizar la privación de al menos un derecho en los últimos cinco años por grupos discriminados[[4]](#footnote-4), se observa que 39.5% de las trabajadoras del hogar remuneradas reportaron esta situación, seguidas de las personas con discapacidad (31.2%), las personas de la diversidad sexual (29.7%) y las personas indígenas (29.5%). Después, se ubican las personas afrodescendientes (26.9%), las mujeres (26.2%) y las personas mayores (24.8%). Tanto las personas de la diversidad religiosa como las y los jóvenes reportan porcentajes ligeramente menores con respecto a otros grupos (24.2 y 23.3%, respectivamente). Ver la siguiente gráfica



* **Discriminación basada en el género: múltiples formas de discriminación interseccional a las que se enfrentan mujeres y niñas que son miembros de las religiones minoritarias o comunidades creyentes.**

La ENADIS 2017, Prontuario de resultados[[5]](#footnote-5) enfatiza la conexión entre la discriminación y las desigualdades, permitiendo documentar prejuicios, actitudes y percepciones, así como estas creencias repercuten en el ejercicio de los derechos. Uno de los principales resultados es que pertenecer a un grupo discriminado genera maltrato y sanción social, la religión no es la excepción, incluso se suma a las desigualdades históricas como lo son: las mujeres, las personas de la diversidad sexual o las personas con una condición de salud-enfermedad ligada con la sexualidad, como lo es el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). En ese sentido, el Cuestionario General identifica a las personas de la diversidad religiosa aquellas que fueron adscritas o auto adscritas como cristinas (protestantes, evangélicas, etcétera), pentecostales, testigos de Jehová u otras (judías, musulmanas o que se identifican con religiones tradicionales u orientales)[[6]](#footnote-6).

De acuerdo con la ENADIS 2017[[7]](#footnote-7), se señala que al 31.4% de mujeres de 18 años y más les negaron injustificadamente algún derecho en los últimos cinco años por grupo discriminado. Es decir, son mujeres hablantes y adscritas indígenas de la diversidad religiosa. Entre los derechos negados son: atención médica o medicamentos, servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco, ser beneficiarias de algún programa social, la imposibilidad de estudiar o seguir estudiando, la oportunidad de trabajar o tener un ascenso, algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta. Ver la siguiente gráfica.



Añadiendo a eso, se señala que el 13.3% de mujeres y hombres de 18 años y más rechazaría a personas de características seleccionadas como cónyuges de hijas e hijos, en particular por si es de otra religión.[[8]](#footnote-8) Asimismo, se observa menor rechazo el rentar una habitación en la vivienda familiar a personas con diferente religión con un 23.3%. No se omite mencionar que las más rechazadas son las personas extranjeras con un 39.1%, seguido de personas jóvenes con un 38.6%, a las personas trans con un 36.4% o que viven con VIH un 35.9%.

La ENADIS 2017, evidencia que en el país la religión es uno de los cuatro principales motivos de discriminación señalados por las personas encuestadas, hallándose después de los relacionados con características físicas, como la forma de vestir o el peso y la estatura. Sin embargo, si se interseccionan otras identidades, como el género, u otros ejes de desigualdad y discriminación, se encuentra que:

* Las creencias religiosas son motivo de discriminación más frecuente para las mujeres (32.3%) que para los hombres (24.8%).
* La población que habla una lengua indígena y es de religión distinta a la católica es de 1.3 millones compuesta por 55.5% de mujeres y de 44.5% de hombres. Existe una discriminación menor cuando se analiza la interseccionalidad por habla de lengua indígena y sexo en contra de las mujeres. Se tiene evidencia con la ENADIS de que entre las que tienen una religión distinta a la católica, las mujeres hablantes de lengua indígena muestran mayor prevalencia de negación de derechos con un 27.1% comparado con el 21.7% de las mujeres de religión distinta pero que no son hablantes.
* El 37.5% de mujeres de 18 años adscritas indígenas de la diversidad religiosa percibió en los últimos 12 meses haber sido discriminada por al menos un motivo (por tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, nivel socioeconómico, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad y orientación sexual).[[9]](#footnote-9)
* La población afrodescendiente que vive en México y tiene una religión distinta a la católica es de 418.1 mil personas (el 62.4% mujeres y el 37.6% hombres). Entre esta población, la prevalencia de negación de al menos un derecho en los últimos cinco años fue de 29.7% mayor que entre aquellas de otra religión, pero no hablantes de lengua indígena que mostraron un valor de 24.7%.
* **Buenas prácticas**

En correspondencia con la meta 16.10 b. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, el Estado mexicano ha llevado a cabo las siguientes acciones.

* **Ejemplos de marcos y medidas legislativas, normativas e institucionales para proteger a las minorías religiosas o comunidades creyentes contra la discriminación y la violencia**

El Estado Mexicano se encuentra comprometido con la garantía y protección de todos los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en los Tratados Internacionales de los que el Estado sea parte. En el artículo primero se establece:

*“…Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.[[10]](#footnote-10).*

Asimismo, la CPEUM en su artículo 24, reconoce que:

“*toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley*. (…)”.[[11]](#footnote-11)

En esa tesitura, tanto las personas como las entidades religiosas poseen igual derecho a ejercer su religión, independientemente del credo que profesen, sea mayoritario o minoritario, de tal manera que el reconocimiento de la libertad religiosa para grupos minoritarios es un tema de igualdad jurídica que apunta a un trato igual entre quienes son iguales y un trato también igual entre quienes son desiguales, pues en términos de la normativa en la materia no se hace ninguna excepción a las distintas religiones.

En virtud de ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3 párrafo segundo y 6 último párrafo de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público “*El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.”* y *“Las Asociaciones Religiosas son iguales ante la Ley en derechos y obligaciones”*.

A saber, las asociaciones religiosas tienen diferentes derechos en términos de la legislación mexicana, de los cuales a continuación se refieren algunos:

1. Derecho a la personalidad jurídica. (Artículos 130 Constitucional, 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 7 de su Reglamento);
2. Derecho a la autonomía en su régimen interno. (Artículos 130 Constitucional, 6 y 9 fracción II de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 5 de su Reglamento);
3. Derecho a impartir educación religiosa. (Artículos 9 fracción V de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 5 de su Reglamento);
4. Derecho a la celebración de actos religiosos. (Artículos 24 Constitucional; 2 incisos a) y b), 21 y 22 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 27 al 29 de su Reglamento);
5. Régimen patrimonial. (Artículos 27 fracción II y decimoséptimo transitorio Constitucional; 9 fracción VI, 16 y 17 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, 20 al 26 de su Reglamento);
6. Derecho al ejercicio ministerial de mexicanos y extranjeros. (Artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 18 de su Reglamento);
7. Derechos políticos de los ministros. (Artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público);
8. Derecho a la asistencia espiritual. (Artículo 6 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público)
9. Derecho a la conciliación y el arbitraje, así como a la amigable composición. (Artículos 28 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 19, 40 al 49 del Reglamento)
10. Derechos individuales y colectivos. (Artículos 2 y 9 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público).

De lo antes expresado se colige que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como su Reglamento, permite la actuación jurídica de iglesias y agrupaciones religiosas que obtienen su personalidad jurídica como asociaciones religiosas en el territorio nacional a través de su registro constitutivo, lo cual en ningún modo se traduce en una exclusión o negativa para otorgar derechos a las iglesias y agrupaciones religiosas que opten por no constituirse como asociación religiosa, pues estas últimas cuentan con el derecho inalienable a la libertad de religión que incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.

Cabe mencionar que las legislaciones mencionadas parten del principio de laicidad respecto a la separación del Estado y la Iglesia. En efecto, la ley reglamentaria es un mecanismo que norma las relaciones jurídicas entre el Estado y las Asociaciones Religiosas.

Es importante señalar que la legislación mexicana va en sincronía con los instrumentos internacionales en la materia como, por ejemplo: Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o en las Convicciones.

Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, establece que se entenderá por discriminación:

*Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos […] el origen étnico o nacional, la religión, las opiniones, o cualquier otro motivo[[12]](#footnote-12).*

Además, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que es discriminación promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación y limitar la libre expresión de ideas, de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que estas no atenten contra el orden público.

De igual manera el marco jurídico mexicano garantiza la libertad de religión y de creencias de las mujeres. En ese sentido, La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) garantiza la protección de las mujeres y hombres contra la discriminación basada en religión (Artículo 3 y 5).[[13]](#footnote-13) Asimismo, La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define como violencia política restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos (Artículo 20 Ter).[[14]](#footnote-14)

Las legislaciones anteriores se reflejan en los compromisos y acciones puntuales dentro de sus instrumentos normativos y de política pública, como lo es el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD) 2019-2024.

Dentro de los lineamientos que enmarca el PND 2019-2024 se incluye a las minorías religiosas o comunidades basadas en creencias y las medidas gubernamentales destinadas a garantizar la protección integral de sus derechos, a través de los principios:

* Al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie. – Ante el sistemático quebrantamiento de las leyes es necesario el respeto al pacto federal, en observancia de los derechos sociales, colectivos y sociales, empezando por los derechos humanos.
* No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. - El respeto de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propiciar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; *se* rechaza toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.

De igual forma el Estado Mexicano prioriza las libertades por sobre las prohibiciones, impulsa los comportamientos éticos más que las sanciones y respeta escrupulosamente la libertad de elección de la ciudadanía en todos los aspectos: las posturas políticas e ideológicas y las creencias religiosas. Para el presente sexenio el quehacer gubernamental impulsa la igualdad como principio rector: la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, entre católicos y no católicos y se compromete en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros.

En materia de empleo y trabajo, el Gobierno de México cuenta con medidas legislativas para garantizar la no discriminación por distintos motivos, donde se encuentra incluido el supuesto relativo a las creencias religiosas, y se establecen sanciones ante tales prácticas.

La Ley Federal del Trabajo cuenta con siete artículos relacionados a prevenir y sancionar actos de discriminación, mismos que se citan a continuación:

* Artículo 2. … Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.
* Artículo 3, segundo párrafo: -No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo.
* Artículo 56. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley [ …] sin que puedan establecerse diferencias y/o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil.
* Artículo 133, Fracciones I y VII: Queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio, y hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento;
* Artículo 378, fracción I: Queda prohibido a los sindicatos intervenir en asuntos religiosos;
* Artículo 685 Ter. - Quedan exceptuados de agotar la instancia conciliatoria, cuando se trate de conflictos inherentes a: I. Discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual;
* Artículo 994, fracción VI: Se impondrá multa, por el equivalente de 250 a 5000 Unidades de Medida y Actualización (21,720 a 434,400‬ pesos), al empleador que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo.

En este sentido, a través de dichas disposiciones se advierte que existe un marco jurídico laboral para garantizar que ningún trabajador en México puede ser objeto de discriminación en su centro laboral.

* **Ejemplos de medidas legislativas, institucionales y de política para enfrentar las injusticias del pasado, incluyendo la violencia y la discriminación, contra las minorías religiosas, y medidas para proporcionar reparación del daño o compensaciones (o ejemplos de la falta de respuesta de los Estados)**

El artículo 43 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es competente para conocer actos u omisiones que sucedan dentro del territorio mexicano, que puedan configurar conductas que se presuman discriminatorias en términos del artículo 1, párrafo segundo, fracción III de la Ley Federal en comento y que son atribuidos a personas particulares o a personas servidoras públicas federales o de los poderes públicos federales[[15]](#footnote-15).

Así, el Consejo conoce de los procedimientos de queja por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales presuntamente discriminatorias imputables a personas servidoras públicas federales en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, personas físicas o morales, así como a particulares.

Para ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación podrá someter a un procedimiento de conciliación entre las partes, sin embargo; en caso de acreditarse el acto, la omisión o la práctica social discriminatoria imputable a personas servidoras públicas federales, poderes públicos federales o particulares el Consejo se encuentra facultado para emitir una Resolución por disposición estableciendo medidas administrativas y de reparación.

El procedimiento de queja del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es administrativo y busca de manera prioritaria la conciliación entre las partes por presuntos actos de discriminación. En relación con los mecanismos de reparación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación puede aplicar las siguientes medidas administrativas:[[16]](#footnote-16)

1. Restitución del derecho conculcado: medida de reparación consistente en el conjunto de acciones encaminadas al restablecimiento del goce de sus derechos a la víctima, pues buscan restablecer la situación previa a la violación al derecho a la no discriminación.
2. Compensación por el daño ocasionado: medida de reparación que se presenta cuando la restitución del derecho conculcado no es posible o existe un acuerdo entre las partes. Consiste en el resarcimiento, que puede ser pecuniario, por el daño sufrido derivado de una violación al derecho a la no discriminación.
3. Amonestación pública: medida de reparación, consistente en la advertencia que se hace a los agentes discriminadores, haciéndoseles ver las consecuencias de la falta que cometieron, con la finalidad de encauzar su conducta en el correcto desempeño de sus acciones y funciones, conminándolos a no repetir las acciones, omisiones o prácticas que dieron origen a la violación del derecho a la no discriminación.
4. Disculpa pública o privada: medida de reparación consistente en un pronunciamiento que realiza el agente discriminador, mediante el cual expresa el reconocimiento de su responsabilidad cometida por la violación al derecho a la no discriminación, la cual va dirigida a las víctimas. Puede ser pública o privada, atendiendo a la naturaleza del caso y al impacto causado.
5. Garantía de no repetición del acto o práctica social discriminatoria: medida de carácter positivo conformada por un conjunto de acciones encaminadas a evitar violaciones futuras al derecho a la no discriminación por motivos y ámbitos similares a los investigados en la queja y a corregir estructuralmente los factores que las originaron, las cuales podrán contener, entre otras, reformas institucionales y legales que promuevan el respeto y protección del derecho a la no discriminación[[17]](#footnote-17).

En virtud de lo anterior, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuenta con datos estadísticos sobre quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación relacionadas con la religión. Del año 2019 al mes de marzo de 2020, se radicaron un total de 6 expedientes de quejas calificados como presuntos actos de discriminación relacionadas con la religión.

De este universo; una queja fue atribuida a personas particulares, y 5 quejas fueron atribuidas a personas servidoras públicas federales.

En cuanto a quejas relacionadas con ministros de culto, no hay ninguna radicada en el mismo periodo, sin embargo; en los meses de junio y julio de 2019 se recibieron en este Consejo 501 peticiones presentadas: 2 por escrito, 188 correos electrónicos que fueron ratificados y 311 correos electrónicos que no fueron ratificados. A través de estas comunicaciones se denunciaron que con motivo de las noticias que circularon con relación a la detención del dirigente de la Iglesia de la Luz del Mundo diversas personas que profesan dicha religión sufrieron diversas agresiones.

En ese sentido, se generaron un total de 179 oficios dirigidos a editoriales, diversos medios de comunicación, autoridades y personas servidoras públicas de los estados de Nayarit, Jalisco, Coahuila, Durango y Yucatán, para la atención de todos los planteamientos con la finalidad de que, en el ámbito de su competencia, se realizaran las gestiones necesarias para prevenir acciones de agresión denunciadas. Asimismo, a cada una de las personas que presentaron su petición por este medio se les informó de las acciones realizadas por este Consejo para atender su planteamiento.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, a través de Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) se encarga de conducir la política del gobierno federal en materia religiosa, y tiene como objetivos: desarrollar la interlocución del Poder Ejecutivo Federal con las instituciones religiosas; garantizar el ejercicio de la libertad religiosa, mediante la atención oportuna de los servicios gestionados por las asociaciones religiosas; y resolver los conflictos de intolerancia religiosa suscitados en el país mediante la intervención concertada y el fomento de los valores de la tolerancia. En tanto, entre sus funciones está: desarrollar los programas y acciones correspondientes a la política del Ejecutivo Federal en la materia y de realizar trámites y procedimientos administrativos para las agrupaciones y asociaciones religiosas, en todo lo referente a su naturaleza, organización, funcionamiento y régimen patrimonial.

Al respecto, la Dirección General de Asuntos Religiosos (DGAR) tiene registrados 104 casos de intolerancia religiosa de 2011 a 2018. De estos, la mayoría ocurrió en el estado de Chiapas, seguido por Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Puebla, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Estado de México, San Luis Potosí, Morelos y Guanajuato, estas últimas tres entidades con tan solo uno o dos conflictos durante ese periodo.

La atención institucional de quejas de intolerancia religiosa por parte de dicha Dirección General ha permitido esbozar los conflictos que ocurren a nivel del país y evidenciar una correspondencia histórica con la forma en que se ha configurado la relación del campo religioso con la esfera pública de la vida política y social, particularmente cuando se observan casos en los que existen desplazamientos forzados y el corte del suministro de servicios públicos como son el agua o la luz.

Además de estos casos registrados que, como se mencionó, corresponden en su mayoría a comunidades donde se rigen bajo usos y costumbres, también es importante mencionar que existen diversas formas de discriminación por motivos religiosos que, dado que se han “normalizado”, no son denunciadas o consideradas como intolerancia religiosa, a pesar de que en ocasione sí llegan a verse afectados los derechos de las personas. A diferencia de las expresiones de intolerancia que parecen más evidentes por enfrentamientos directos entre comunidades o miembros de las mismas, la intolerancia religiosa “pasiva” genera otro tipo de conflictos que suelen identificarse con causas muy diversas donde el componente religioso puede resultar sutilmente oculto.

Ante el escenario de discriminación e intolerancia religiosa, y en el marco de la conmemoración del día internacional por la paz, el Gobierno de la República reitera su reconocimiento al trabajo que las diferentes tradiciones religiosas llevan a cabo en la construcción de una cultura de paz y anuncia la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa

Asimismo, se señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) otorga servicios gratuitos de asesoría, orientación y/o representación jurídica, en caso de que los trabajadores enfrenten alguna situación de discriminación

* **Iniciativas o acciones específicas que promuevan la participación efectiva de las minorías religiosas o de creencias en la vida pública al generar procesos de toma de decisiones inclusivos y representativos.**

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, presentó en septiembre de 2019 la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa: Creamos la Paz, con el propósito de promover la consideración y miramiento a la diversidad religiosa del país, a fin de favorecer relaciones de cooperación para la construcción de la paz. Dentro de sus objetivos se incluyen conocer la diversidad religiosa del país; identificar identidades culturales, religiosas y comunitarias; conocer las identidades, prácticas y creencias de los pueblos originarios; y promover relaciones armónicas el respeto. [[18]](#footnote-18)

Se destaca que para la creación del PROIGUALDAD 2020-2024, en 2019 el Instituto Nacional de las Mujeres llevó a cabo 32 Foros de Consulta Estatales “Mujeres trabajando juntas por la transformación de México”, uno por cada entidad federativa y un Foro Nacional, en las que diversidad de mujeres conversaron, analizaron y propusieron las acciones que el Gobierno de México deberá encausar sus acciones para garantizar los derechos de las mujeres en los distintos ámbitos, como: 1) Mujeres viviendo en comunidades seguras y en paz, 2) Mujeres tomando decisiones, 3) Mujeres libres de violencia, 4) Mujeres con salud y bienestar, 5) Reparto de las labores de cuidado y 6) Mujeres con independencia económica. En el desarrollo de los foros, participaron diversas mujeres como los son: mujeres indígenas, campesinas y jornaleras, afrodescendientes, jóvenes, trabajadoras del hogar, trabajadoras (obreras, trabajadoras de maquila, sector servicios, etc.), jefas del hogar, víctimas de violencia de género, microempresarias, adultas mayores, madres jóvenes, mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, defensoras de derechos humanos, académicas-investigadoras, trabajadoras sexuales, mujeres constructoras de la paz, lesbianas y trans, funcionarias públicas, ciudadanas mujeres no organizadas y de Organizaciones de la Sociedad Civil; promoviendo un espacio de diálogo bajo el principio de no dejar a nadie atrás. Estos foros dieron como resultado el PROIGUALDAD que refleja las acciones en favor de las mujeres que demandan desde todos los ámbitos.

* **Adecuación y eficacia en la formación de los agentes del orden en materia de monitoreo, vigilancia, combate y respuesta a la discriminación y los delitos de odio relacionados con la religión las creencias.**

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación tiene como atribuciones, entre otras, proporcionar orientación, formación y capacitación bajo diversas modalidades, así como, sensibilizar, capacitar y formar a personas servidoras públicas en materia de no discriminación.

Para dar cumplimiento a esta atribución, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación cuenta con un sitio el línea llamado *Conéctate* cuyo propósito es ampliar los servicios de sensibilización y formación en el derecho a la igualdad y no discriminación. Su objetivo principal es informar y sensibilizar al personal de la Administración Pública Federal (APF), Estatal y Municipal, así como integrantes de la sociedad civil y población en general en materia del derecho a la igualdad y no discriminación para identificar, prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias que puedan incurrir en su entorno laboral, social y familiar[[19]](#footnote-19).

A través de esta plataforma se pretende romper las barreras espacio-temporales y llegar a personas e instituciones en todos los Estados de la República Mexicana y el mundo mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

La oferta educativa consta de 17 cursos auto-instructivos entre los cuales destaca el curso *Tolerancia y diversidad de creencias* cuyo objetivo es reconocer la importancia de respetar la diversidad religiosa en México, identificando las consecuencias de la discriminación y la vulneración al ejercicio de los derechos humanos por motivos religiosos, para contribuir a la construcción de relaciones humanas que convivan con diferentes credos, prácticas y espiritualidades basadas en el respeto mutuo, tolerancia e igualdad de oportunidades. Desde el mes de febrero de 2019 y hasta el mes de abril de 2020 se han llevado a cabo 13 periodos de apertura a dicho curso y se han inscrito 5, 568 personas de las cuales egresaron 3, 365 personas -2, 133 mujeres y 1, 232 hombres-.

El curso fue tomado por servidores públicos de 44 instituciones públicas:

* 18 instituciones de la Administración Pública Federal,
* 12 instituciones de la Administración Pública Estatal
* 6 instituciones de la Administración Pública Municipal
* 5 organismos Autónomos (OA)
* 3 instituciones del Poder Judicial y/o Legislativo (PJ/PL)

Particularmente con los cursos se pretende que el servicio público conozca y aplique la ley relativa a la prevención de la discriminación y formule e implemente políticas públicas antidiscriminatorias.

* **Recursos proporcionados por los Estados a las víctimas de delitos motivados por el odio religioso.**

En los Centros de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se brinda atención psicológica, jurídica, de trabajo social y médica a víctimas de delitos del fuero federal, así como violaciones a Derechos Humanos cometidas por servidores públicos federales, se supervisa que la atención que se brinde a las y los usuarios siempre se realice bajo la óptica del enfoque psicosocial, el transformador, el de género, diferencial y especializado y el de derechos humanos, en el mismo sentido se realizan las coordinaciones necesarias con las instituciones correspondientes, buscando que se reconozcan y garanticen en el efectivo ejercicio de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en las legislaciones nacionales como internacionales.

En el mismo orden de ideas, se realizan vinculaciones con Defensorías Públicas Especializadas con la intención de cubrir todas las necesidades jurídicas que propicien una amplia reparación del daño y garanticen el acceso a la justicia, participando en el fortalecimiento de la vinculación interinstitucional que se realiza sobre todo en la inclusión de programas sociales que promuevan el acceso a la educación y la inserción en el empleo, así como las acciones para garantizar una atención especializada, itinerante y diferencial con perspectiva de género promoviendo el empoderamiento de las mujeres y niñas.

Se contempla además como una acción por parte de la Dirección General de Atención a Víctimas la realización de buenas prácticas de manera laica, sin distinción ni discriminación, respetando en todo momento la protección a los derechos humanos.

De acuerdo a lo establecido en el numeral 5 de la Ley General de Víctimas que reconoce la existencia de grupos vulnerables como las comunidades indígenas, proporciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, atención especializada de acuerdo a sus particularidades y su grado de vulnerabilidad, con garantías especiales y medidas de protección por estar expuestos a un mayor riesgo de violación a sus derechos humanos, con la finalidad de obtener justicia y la reparación integral para continuar su proyecto de vida.

Se busca, además, reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo. Concientizando a las personas que acuden a los CAI respecto de su situación como una forma de violencia a través de una escucha activa y asertiva. Informarle de sus derechos y su vida libre de violencia. Evitar en las víctimas la normalización de los actos delictivos a través de la cultura de la denuncia y la debida diligencia.

Finalmente, a través del Centro de Atención Integral de Querétaro de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se identificaron dos casos de víctimas desplazadas en comunidades indígenas, mujeres indígenas de la zona de Amealco, víctimas del delito de trata de personas y de posible desaparición de persona. Con estos dos posibles casos en nuestro entorno en dicho Estado se puede contribuir señalando, lo siguiente: En la actualidad, existen al menos 286 comunidades indígenas que están distribuidas en 15 de los 18 municipios del estado de Querétaro, principalmente en los municipios de Tolimán, Amealco de Bonfil y la capital, representando el 3.4 por ciento del total de la población estatal y son quienes más rechazo y/o discriminación sufren, se siguen manifestando expresiones de burla contra personas de origen indígena, por su forma de vestir y de hablar, situaciones que se siguen presentando en plena vía pública.

Este grupo tiene nula participación y representación en la vida pública, por supuesto que su acceso a la justicia y recursos efectivos es violentado desde que no existen traductores que acompañen en los procesos de procuración e impartición de justicia; la libertad y seguridad, libertad de expresión, asamblea y asociación también resulta afectada, sobre todo en la búsqueda de trabajo con la venta de sus artesanías. Los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos, entre otros, los derechos a una alimentación y vivienda adecuadas, educación, empleo y atención médica, resultan una aspiración, ya que muchas de sus mujeres incluso son víctimas de trata de personas. Este Centro de Atención Integral cuenta con participación en al menos un caso de esta naturaleza. Se da cuenta de algunas prácticas de promoción sobre Derechos Humanos, así como de impulso a actividades de comercialización de artesanías, sin embargo, se ve aparejada a beneficios que impulsan a una minoría del grupo originario, en este caso, la atención interdisciplinaria coadyuvó a la víctima a su proceso de empoderamiento y autonomía, promoviendo su acceso a la justicia.

Se comparte la siguiente información:

|  |  |
| --- | --- |
| Víctimas registradas en REFEVI al 15 de mayo de 2020, que consideran que el hecho víctimizante se debió a su Religión o creencias o por Sexo. | |
| Sexo | **Total** |
| Hombre | 79 |
| Mujer | 112 |
| Total, General | **191** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Víctimas registradas en REFEVI al 15 de mayo de 2020, que consideran que el hecho víctimizante se debió a su Religión o creencias, por Rango de edad cuando se registró en el RENAVI y Sexo | | | |
| Rango de edad registro | **Hombre** | **Mujer** | **Total** |
| De 0 a 5 años | 2 | 1 | 3 |
| De 6 a 10 años | 6 | 2 | 8 |
| De 11 a 15 años | 4 | 9 | 13 |
| De 16 a 20 años | 2 | 12 | 14 |
| De 21 a 25 años | 5 | 7 | 12 |
| De 26 a 30 años | 4 | 3 | 7 |
| De 31 a 35 años | 7 | 8 | 15 |
| De 36 a 40 años | 6 | 12 | 18 |
| De 41 a 45 años | 9 | 19 | 28 |
| De 46 a 50 años | 8 | 12 | 20 |
| De 51 a 55 años | 5 | 5 | 10 |
| De 56 a 60 años | 1 | 2 | 3 |
| De 61 a 65 años | 4 | 3 | 7 |
| De 66 a 70 años | 1 | 9 | 10 |
| De 71 a 75 años | 4 | 0 | 4 |
| De 76 a 80 años | 4 | 2 | 6 |
| De 81 a 85 años | 2 | 1 | 3 |
| De 86 a 90 años | 1 | 0 | 1 |
| De 91 a 95 años | 0 | 1 | 1 |
| De 96 años o mas | 1 | 0 | 1 |
| Sin dato | 3 | 4 | 7 |
| Total, General | **79** | **112** | **191** |

|  |  |
| --- | --- |
| Víctimas registradas en REFEVI al 15 de mayo de 2020, que consideran que el hecho víctimizante se debió a su Religión o creencias, por Entidad federativa donde ocurrieron los hechos víctimizantes | |
| Entidad Federativa de los hechos víctimizantes | **Total** |
| Baja California | 1 |
| Chiapas | 4 |
| Ciudad de México | 26 |
| Durango | 5 |
| Guerrero | 29 |
| Hidalgo | 3 |
| México | 40 |
| Michoacán de Ocampo | 2 |
| Morelos | 8 |
| Nuevo León | 1 |
| Oaxaca | 16 |
| Puebla | 1 |
| Sonora | 3 |
| Tabasco | 2 |
| Tamaulipas | 23 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 18 |
| En el extranjero | 2 |
| Sin dato | 7 |
| Total, general | **191** |

|  |  |
| --- | --- |
| Víctimas registradas en REFEVI al 15 de mayo de 2020, que consideran que el hecho víctimizante se debió a su Religión o creencias, por el año en que ocurrieron los hechos víctimizantes | |
| Año del hecho víctimizante | **Total** |
| 1970 | 1 |
| 1971 | 1 |
| 1972 | 2 |
| 1974 | 16 |
| 1975 | 2 |
| 1976 | 2 |
| 1978 | 3 |
| 1981 | 3 |
| 1982 | 2 |
| 1989 | 1 |
| 2001 | 1 |
| 2006 | 2 |
| 2007 | 4 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 5 |
| 2010 | 4 |
| 2011 | 27 |
| 2012 | 37 |
| 2013 | 30 |
| 2014 | 11 |
| 2015 | 17 |
| 2016 | 1 |
| 2018 | 1 |
| Sin dato | 17 |
| Total, general | **191** |

|  |  |
| --- | --- |
| Víctimas registradas en REFEVI al 15 de mayo de 2020, que consideran que el hecho víctimizante se debió a su Religión o creencias, con información de daño sufrido. | |
| ¿Se cuenta con información del daño sufrido? | **Total** |
| Con información | 99 |
| Sin información | 92 |
| Total, general | **191** |

|  |  |
| --- | --- |
| Víctimas registradas en REFEVI al 15 de mayo de 2020, que consideran que el hecho víctimizante se debió a su Religión o creencias, por tipo de daño sufrido. | |
| Tipo de daño sufrido | **Total** |
| Físico y Psicológico | 9 |
| Físico y Sexual | 1 |
| Físico, Patrimonial y Sexual | 1 |
| Físico, Psicológico y Patrimonial | 5 |
| Físico, Psicológico y Sexual | 10 |
| Físico, Psicológico, Patrimonial y Sexual | 9 |
| Patrimonial | 2 |
| Patrimonial y Sexual | 2 |
| Psicológico | 11 |
| Psicológico y Patrimonial | 9 |
| Psicológico y Sexual | 19 |
| Psicológico, Patrimonial y Sexual | 8 |
| Sexual | 12 |
| Otro | 1 |
| Total, general | **99** |

Finalmente se informa que el 21 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman las fracciones XXIX y XXXII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación con la finalidad de otorgar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación atribuciones para prevenir el discurso de odio.

El texto de la reforma de 2018 a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación dispone lo siguiente:

***XXIX.****Promover el derecho a la no discriminación mediante campañas de difusión y  Adicionalmente, se promoverá la prevención y erradicación del discurso de odio, en coordinación con las instituciones públicas, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil;*

***XXXII.****Elaborar, difundir y promover que en los medios de comunicación se incorporen contenidos orientados a prevenir y eliminar las prácticas discriminatorias y el discurso de odio;*

En correspondencia con lo anterior, desde 2013, el Estado mexicano, a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se unió a la campaña global *No Hate Speech Movement*, impulsada por el Consejo de Europa (CoE), mediante la cual ha implementado acciones para prevenir y combatir los discursos de odio que se presentan en los espacios físicos como en las tecnologías de la información.

En una primera etapa, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación implementó la campaña "Sin Tags" (2014-2016), que promovía acciones para transformar la discriminación y el cyberbullying entre personas jóvenes, a través de la difusión de contenidos en redes sociales sobre la tolerancia y los derechos humanos, en diferentes líneas temáticas como racismo, clasismo y xenofobia.

En una segunda etapa iniciada en 2016, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación impulsó el *Movimiento Frente al Discurso de Odio*, una iniciativa que busca contrarrestar los discursos y expresiones de odio utilizados en espacios físicos y medios de comunicación digitales contra varios grupos discriminados, creando narrativas incluyentes y que inviten al diálogo.

Esta iniciativa responde a la necesidad de contrarrestar el aumento del discurso de odio en diversas áreas físicas y virtuales contra varios grupos discriminados, entre ellos las personas migrantes, mujeres, personas jóvenes, entre otros, y pretende movilizar a las personas jóvenes, las organizaciones de jóvenes de la sociedad civil, instituciones públicas, empresas privadas y a todas las personas interesadas en prevenir y combatir el discurso de odio, proporcionando herramientas de capacitación para desarrollar proyectos sobre el tema.

Como una actividad permanente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el marco del Movimiento, se difunde información sobre no discriminación en redes sociales relacionados con días internacionales y nacionales de derechos humanos. En fechas recientes se ha producido material para el 27 de enero, conmemoración de las víctimas del holocausto, 21 de febrero, día de la lengua materna, 8 de marzo, día internacional de la mujer, 21 de marzo, día internacional para la eliminación de la discriminación racial, 1º de mayo día internacional del trabajo y 3 de mayo: 10º aniversario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

* **Medidas implementadas por los Estados para proteger los derechos humanos de las mujeres y niñas que son vulnerados por comunidades religiosas.**

Los derechos de las mujeres han sido un tema de interés nacional ya que involucra un impulso por garantizar la igualdad sustantiva, tal como lo ostenta la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el que México está suscrito. Documento que invita a los Estados Parte la obligatoriedad por un lado de sentar las bases legales de la igualdad entre mujeres y hombres, y por otro de asegurar la igualdad de resultado, es decir, de alcanzar sin ningún tipo de obstáculos el respeto, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres.

En este contexto, la labor del Instituto Nacional de las Mujeres ha sido fundamental para el desarrollo de iniciativas que han impulsado la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de nuestro país, mediante acciones de coordinación y vinculación interinstitucional, sensibilización y fortalecimiento de capacidades, así como de promoción y de difusión. Así como lo señala la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en sexo y creencias religiosas.

Este PROIGUALDAD plantea impulsar el adelanto de las mujeres y niñas, y su plena autonomía y participación económica, cultural, política y social, sin discriminación y con pleno respeto a la diversidad cultural, sexual, política y religiosa. Por ello, tiene entre sus objetivos prioritarios, mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos (objetivo prioritario 3); y posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado (objetivo prioritario 5). Cuenta con acciones puntuales tendientes a modificar la cultura misógina y los estereotipos de género que dañan las condiciones de vida de las mujeres y niñas.[[20]](#footnote-20)

El **PROIGUALDAD 2020 -2024,** derivado del PND 2019-2024, considera los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al reconocimiento y ejercicio de las garantías individuales para todas las personas, y contribuye al nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar que plantea el PND.

A continuación, se enuncian las acciones consideradas en el PROIGUALDAD 2020-2024 en materia de no discriminación a las que el INMUJERES dará puntual seguimiento y coadyuvará en su implementación:

|  |  |
| --- | --- |
| **No. de acción** | **Acción Puntual** |
| 4.1.7 | Promover la coordinación entre autoridades para la armonización jurídica a los actos de **discriminación** y violencia contra las mujeres y niñas, así como atender progresivamente Recomendaciones internacionales del Comité CEDAW. |
| 4.7.3 | Promover la articulación de organizaciones y colectivos de la sociedad civil que trabajan en contra de la **discriminación** y violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. |
| 5.3.8 | Impulsar la participación igualitaria y **sin discriminación** de las mujeres en las comunidades indígenas o rurales, considerando el ejercicio de la libre autodeterminación. |

**Glosario de abreviaturas**

|  |  |
| --- | --- |
| DGAR | Dirección General de Asuntos Religiosos |
| CPEUM | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
| CONAPRED | Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación |
| ENADIS | Encuesta Nacional sobre Discriminación |
| INEGI | Instituto Nacional de Estadística y Geografía |
| LGIMH | La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres |
| LFPED | Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación |
| LGAMVLV | Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia |
| PND | Plan Nacional de Desarrollo |
| PROIGUALDAD | Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres |

* **Medidas e iniciativas para promover el entendimiento y la cooperación entre las diferentes comunidades religiosas en la vida pública.**

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como institución rectora de la política antidiscriminatoria del Estado mexicano y en su atribución de favorecer el desarrollo cultural, social y democrático del país, informa la realización de las siguientes acciones para combatir la discriminación y las formas conexas de intolerancia, incluida la discriminación por motivos religiosos.

* Acciones de vinculación.

1. Grupo de trabajo sobre diversidad religiosa: este grupo reúne a personas que forman parte de diversas comunidades religiosas con interés y trabajo por la no discriminación con la finalidad de, por un lado, contar con un diagnóstico de primera mano sobre cómo viven discriminación las personas de sus comunidades y, por el otro, poder acercarles los servicios, proyectos e iniciativas del Consejo para que se socialicen a través de sus diversos espacios. Tiene una periodicidad trimestral y en 2019 se realizaron cuatro reuniones, la tercera de las cuales se dio con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para refrendar el apoyo al Estado laico y la libertad religiosa en México. Participan las Iglesias Católica Romana, Anglicana, Luterana, Bautista, Presbiteriana, Adventista del Séptimo Día, de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Luz del Mundo, Veterocatólica, y las Comunidades Judía, Musulmana, Budista, Sikh, Bahai y de Scientology.
2. Se ha establecido una relación formal y constructiva con la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación para atender el tema religioso. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación firmó la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa que fue lanzada el Día Internacional por la Paz en el Museo Memoria y Tolerancia. Se participa en reuniones conjuntas.
3. Participación en espacios de vinculación como la Red de Iglesias por la Paz que acompaña a víctimas de la violencia en México y organizó las jornadas de Diez Días por la Paz del 21 al 30 de septiembre de 2019, así como en espacios de análisis como el Observatorio Eclesial formado por organismos civiles de inspiración religiosa.
4. Participación en el evento “Creando Raíces” de la Comunidad Sikh Dharma de México en compañía del Director General de Asociaciones Religiosas y representantes de las embajadas de India y Pakistán, con un mensaje sobre la inclusión de los sikhs en la sociedad mexicana.
5. Asistenciaa la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a la celebración del 2019 Año de la Tolerancia Religiosa decretado en los EAU. Para esta actividad se asesoró a la embajada en cuanto a invitaciones a la Comunidad Judía y la Iglesia Católica Romana.

Con el objetivo de visibilizar la realidad sobre la diversidad religiosa de la sociedad mexicana y en aras de favorecer el acompañamiento para las minorías religiosas el Estado mexicano a través del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación emite mensajes de felicitación en el marco de algunas festividades religiosas.

En correspondencia con lo anterior, el día viernes 24 de abril el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación transmitió en redes sociales un mensaje de acompañamiento a la comunidad musulmana en el mes del Ramadán, destacando su importancia y aporte a la diversidad cultural y religiosa del país.

1. Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Ver. Objetivos del Desarrollo Sostenible, Disponible en <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/> [↑](#footnote-ref-1)
2. De acuerdo con la ENADIS 2017 son personas de la diversidad aquellas auto adscritas en la encuesta como cristianas (protestantes, evangélicas, etc.) pentecostales, testigos de Jehová u otras (judías, musulmanas o que se identifican como religiones tradicionales u orientales) [↑](#footnote-ref-2)
3. Para mayor información sobre la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017*,* favor de consultar el siguiente link sobre el Prontuario de resultados <https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Se refiere a la negación injustificada de al menos uno de los derechos captados: la atención médica o medicamentos; la atención o servicios en alguna oficina de gobierno; la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco; recibir apoyos de programas sociales; la posibilidad de estudiar o seguir estudiando; la posibilidad de trabajar y obtener un ascenso; y de algún crédito de vivienda, préstamo o tarjeta [↑](#footnote-ref-4)
5. Para mayor información, diríjase a <http://sindis.conapred.org.mx/wp-content/uploads/2019/02/ENADIS_2017_Prontuario.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. Cabe mencionar que la ENADIS 2017, no hace referencia a mayores datos sobre esto. Link: <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENADIS%202017%20electronico.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. Página 108 de la ENADIS 2017. Portuario de Resultados. <http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/ENADIS%202017%20electronico.pdf> [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibidem, página 90. [↑](#footnote-ref-8)
9. ENADIS 2017: encuesta nacional sobre discriminación- resultados sobre mujeres, en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos\_download/ENADIS%202017%20electronico.pdf [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.juridicas.unam.mx/legislacion/ordenamiento/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos#10536> CPEUM, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1\_060320.pdf [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibídem [↑](#footnote-ref-11)
12. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), artículo 1, fracción III. Disponible en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/262_210618.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. La LGIMH establece lo siguiente: “Artículo 3. Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los hombres que se encuentren en territorio nacional, que, por razón de su sexo, independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. (…) Artículo 5. Discriminación. Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas” en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH\_140618.pdf. [↑](#footnote-ref-13)
14. LGAMVLV, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV\_130418.pdf. [↑](#footnote-ref-14)
15. Artículo 43 (LFPED). - El Consejo conocerá de las quejas por presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, e impondrá en su caso medidas administrativas y de reparación que esta Ley previene.

    Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos, omisiones, o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de un representante. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ídem. Artículo 83. [↑](#footnote-ref-16)
17. Secretaría de Gobernación, Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas administrativas y de reparación del daño en casos de discriminación [↑](#footnote-ref-17)
18. Segob, Boletín No. 240/2019, en https://www.gob.mx/segob/prensa/secretaria-de-gobernacion-presenta-estrategia-nacional-para-la-promocion-del-respeto-y-la-tolerancia-a-la-diversidad-religiosa-218341 [↑](#footnote-ref-18)
19. Para mayor información del sitio web Conéctate de Conapred, visitar el siguiente link: <http://conectate.conapred.org.mx/> [↑](#footnote-ref-19)
20. Actualmente el Proigualdad se encuentra en el proceso de dictaminación y aprobación, por lo que será público hasta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). [↑](#footnote-ref-20)